Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

Resolución N° 655/2005.TC-SU

Sumilla : *Declarar no ha lugar la imposición de sanción administrativa al Consorcio A y S Seguridad S.R.L. y Vicmer S.A.C., por la infracción tipificada en el literal f) del artículo 205 del Reglamento vigente al momento de suscitarse los hechos, referido a la presentación de documentos falsos y/o declaración jurada con información inexacta.*

Lima, 08.JULIO.2005

Visto, en sesión de la Sala Única del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, de fecha 8 de julio de 2005, el Expediente N° 1297/2004.TC, referido al procedimiento administrativo sancionador contra el Consorcio conformado por las empresas A y S SEGURIDAD S.R.L. – VICMER S.A.C. por presunta responsabilidad en la presentación de documentos falsos y/o declaración jurada con información inexacta durante la Adjudicación directa Selectiva N° 0017-2004-HSJ, convocada por el Hospital San José, con el objeto de contratar el servicios de vigilancia y seguridad privada; y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES:

1. El 27 de octubre de 2004, la empresa Lider Security S.A.C. comunicó a este Tribunal diversos hechos vinculados a una presunta infracción cometida por el consorcio A Y S Seguridad S.R.L. y Vicmer S.A.C., en lo sucesivo el Consorcio, durante el desarrollo de la Adjudicación Directa Selectiva N° 017-2004-HSJ, convocada por el Hospital san José, en adelante la Entidad, adscrito al Ministerio de Salud. Entre la documentación presentada se encuentra un informe legal preparado por el abogado de la empresa referida, en el que se afirma que el Consorcio sería pasible de sanción por haber infringido el principio de moralidad *"al mantener en error al Comité Especial sobre la pérdida de las condiciones de infraestructura ofertadas en el proceso selectivo sub materia"* (sic). Añade el informe que existiría responsabilidad funcional de los empleados de la Entidad.

Los hechos que motivan la comunicación de la empresa Lider Security S.A.C. se refieren a que el Consorcio declaró en el proceso de selección que su domicilio era Asociación de Vivienda Los Tulipanes, Mz. A, Lote 1, Los Olivos. El mismo domicilio figura en diversos documentos de la empresa A Y S Seguridad S.R.L. confortantes de la propuesta técnica presentada. Pese a las circunstancias anotadas, el domicilio del Consorcio habría sido variado, lo que constituiría infracción, en opinión de la empresa denunciante.

2. Requerida la Entidad para que emita su pronunciamiento con relación a los hechos puestos de manifiesto por la empresa denunciante, con fecha 3 de diciembre de 2004 se remitió un escrito en el que se adjuntó el Informe Legal N° 024-04-OAJ-HSJ-C. El referido documento adolece de imprecisiones; sin embargo, se pueden extraer algunas conclusiones:
 - (i) En el momento de la presentación del recurso de apelación, el 28 o 29 de octubre de 2004, el Consorcio declaró como domicilio Asociación de Vivienda Los Tulipanes, Mz. A, Lote 1, Los Olivos.
 - (ii) Sin embargo, de acuerdo a copias de diversos documentos aportados por el propio Consorcio, a la fecha indicada su domicilio había sido variado. Tal lo muestra el Certificado de Vigencia de Registro otorgado por el Ministerio de Trabajo y Promoción Social, de fecha 5 de octubre de 2004, el RUC fechado el 20 de septiembre de 2004, Resolución de DICSCAMEC fechada el 27 de octubre de 2004 y Certificado de Funcionamiento, fechado el 27 de septiembre de 2004. En dichos documentos figura la siguiente dirección: Conjunto Carlos Cueto Fernandini, Pasaje Docencia N° 109, Mz. B3, Lote 5, Los Olivos.
 - (iii) En atención a los hechos señalados, en el informe de la Entidad se afirma que *aparentemente* (sic) el Consorcio habría cometido infracción.
3. El 6 de diciembre de 2004 se abrió expediente administrativo sancionador contra el Consorcio, por la presunta comisión de la infracción tipificada en el inciso f) del artículo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2001-PCM, norma vigente al momento de ocurridos los hechos materia del procedimiento. En la referida ocasión se emplazó al Consorcio para que presente sus descargos.
4. El día 28 de enero de 2005 el Consorcio presentó sus descargos, los que, principalmente, consisten en lo siguiente:
 - (i) Antes de la apertura del sobre N° 1, acto efectuado el día 16 de septiembre de 2004, su domicilio fue Asociación de Vivienda Los Tulipanes, Mz. A, Lote 1, Los Olivos.
 - (ii) Posteriormente, la empresa consorciada A y S Seguridad cambió su domicilio a Pasaje Docencia N° 109, Los Olivos.

FUNDAMENTACIÓN:

1. Los hechos que han motivado la apertura del procedimiento administrativo sancionador fueron puestos de manifiesto luego de que el Consorcio presentara una impugnación contra el acto de otorgamiento de la buena pro que había favorecido a la empresa denunciante.
2. El asunto de que trata la denuncia, de acuerdo con el informe de la Entidad, es que el Consorcio, declaró como suyo un domicilio que posteriormente fue variado. De acuerdo con el informe del abogado de la empresa denunciante tal cambio provocó error en el Comité Especial por no haber sido *"mantenido o variado de acuerdo a ley"* (sic), pues se habría producido *"la pérdida de las condiciones de infraestructura ofertadas en el proceso sub materia"*^[1].

La Entidad, sin embargo tiene una perspectiva distinta del asunto, pues en su Informe Legal N° 024-04-OAJ-HSJ-C afirma que la falsedad consistiría en que, en ocasión de la presentación del recurso de apelación^[2], el Consorcio señaló como su domicilio Asociación de Vivienda Los Tulipanes, Mz. A, Lote 1, Los Olivos, el que había sido variado a la fecha de presentación del recurso.

3. El descargo del Consorcio ha consistido en que si bien señaló inicialmente un domicilio para efectos del proceso, posteriormente dicho domicilio fue variado, habiéndosele notificado diversas actuaciones incluso a un tercer domicilio, sito en Av. Canadá N° 619, Urbanización Santa Catalina, La Victoria, con fecha 9 de octubre de 2004.
4. Son hechos aceptados por la empresa denunciante como por la Entidad que el Consorcio varió su domicilio durante el proceso de selección. Este hecho es perfectamente legítimo pues no está sujeto a formalidad alguna, de acuerdo a Ley. Si se hubiera producido algún problema con la comunicación a la Entidad ello pudo haber acarreado dos posibles consecuencias: (i) Que la Entidad, al intentar alguna verificación dentro del proceso, no habría ubicado el domicilio, produciéndose la descalificación del Consorcio; o, (ii) La Entidad habría solicitado la aclaración respectiva al Consorcio, o por la vía de la impugnación, éste hubiera manifestado que su domicilio había sido variado, por lo que las verificaciones o instalaciones se debían producir en la nueva dirección.
5. El enfoque de la denuncia y del informe de la Entidad enfatiza el hecho de que el Consorcio no habría informado la modificación del domicilio, hecho que desde ningún punto de vista puede ser considerado atentatorio de principio alguno, como no sea indicador de la diligencia del actuar del Consorcio.

Es, por tanto, extremo y carente de fundamento vincular la omisión de un proceder adecuado o aconsejable con la falsedad documentaria, que es la hipótesis de que trata el inciso f) del artículo 205 Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, norma vigente al momento de ocurridos los hechos, por lo que no es procedente la imposición de sanción al Consorcio.

Por estos fundamentos, con la intervención del Ing. Félix Delgado Pozo y de los Dres. Gustavo Beramendi Galdós y Marco Martínez Zamora, atendiendo a la reconfiguración de la Sala Única del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado según lo dispuesto en la Resolución N° 119-2004-CONSUCODE/PRE, expedida el 25 de marzo de 2004, así como lo establecido mediante Acuerdo de Sala Plena del Tribunal N° 001/2004, expedido el 24 de marzo de 2004 y de conformidad con las facultades conferidas en los artículos 53°, 59° y 61° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, así como el Decreto Supremo N° 013-2001-PCM, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 28267; analizados los antecedentes y luego de agotado el correspondiente debate;

[1] Numerales 4.1 y 4.3 del Informe Legal N° 077-ALE-LIDER-2004, folio 15 del expediente.

[2] El informe señala que tal recurso se presentó el 28 o 29 de octubre de 2003. No se consigna una fecha exacta. Folio 4 del Anexo del expediente remitido por la Entidad.

LA SALA RESUELVE:

1. Declarar que no ha lugar la imposición de sanción al consorcio A Y S Seguridad S.R.L. y Vicmer S.A.C., por los fundamentos expuestos.
2. Devolver a la Entidad los antecedentes administrativos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

Delgado Pozo.

Beramendi Galdós.

Martínez Zamora.